

Delincuencia, represión y orden establecido

Arturo Sosa A.

Estos primeros meses de 1990 parecen haber sido tomados para sí por la delincuencia en las calles de las ciudades y pueblos o en los caminos de toda Venezuela. Los delincuentes son los nuevos actores sociales poderosos, si nos dejamos llevar por el impacto noticioso de los medios de comunicación o por los comentarios comunes entre compañeros de trabajo, amigos o familiares. Con cualquiera que nos encontramos nos cuenta de su participación en algún asalto, robo, susto o arrebato reciente... La sensación de inseguridad y hasta de miedo se ha apoderado de una buena parte de la población que comienza a inhibirse de salir de noche o pasar por algún sitio "desconocido" o dirigirse a algún lugar donde "no es conocido".

Ese miedo y sensación de inseguridad no se corresponde con un análisis a fondo de las causas del aumento de la delincuencia. Se genera una búsqueda desesperada, a veces irracional de "seguridad", que se manifiesta en la petición y/o aceptación de medidas de represión más o menos aparatosas realizadas por los órganos del Estado o por los llamados mecanismos de "autodefensa". A la represión violenta de la delincuencia se suma así la represión, también violenta, policial, de vigilantes privados, de los "vecinos" autodefensores...

Ante esta situación vale la pena hacer algunas preguntas: ¿es la represión una salida social o, al menos, una solución al problema de la delincuencia? o, más bien, ¿es la delincuencia "funcional" (en el fondo conveniente) al actual "orden establecido"? ¿En qué sentido el auge de la delincuencia es utilizado también para favorecer el reacomodo de las relaciones de poder?

LA REALIDAD SOCIAL DE LA DELINCUENCIA

El hecho mismo del "débordamiento" de la delincuencia no ha sido establecido con mucha objetividad. Sin duda que se

trata de un problema real y muy grave. Sin embargo, ni el Gobierno ni los diferentes cuerpos policiales han ofrecido datos convincentes de lo que está pasando y comparables con el pasado reciente. El auge de estos meses, siendo real, ha sido también inflado por el mensaje social, por la incertidumbre. Si uno revisa periódicos de hace unos cinco años consigue expresiones y reportajes casi idénticos a los que hoy nos vuelven a almar. Un primer esfuerzo social que deberíamos hacer es conocer el problema en toda su magnitud y complejidad, con base en la realidad y sin dejarnos llevar del "rumor" que genera un aumento injustificado de la sensación de inseguridad y la reacción por miedo, es decir, con un alto componente de irracionalidad.

El auge delictual ha vuelto a manifestar los límites del apartheid venezolano. Cuando se habla del auge delictivo se señalan la multiplicación de asaltos, arrebates, robos de vehículos, hurtos en residencias... delitos cuyas "víctimas" son los sectores medios y altos de la población y cuyos agentes son los "habitantes de los barrios". De allí que la sensación de inseguridad y el miedo lleven a considerar a todo el que vive en barrio un delincuente actual o, al menos potencial. Se pide que la policía actúe duramente contra los barrios sentidos como "guardias de ladrones". Y nos olvidamos con enorme facilidad que en los barrios viven las dos terceras partes de la población urbana. Es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos viven en barrios. La inmensa mayoría de los trabajadores, incluyendo los policías y los guardias nacionales viven en los barrios. La mayor parte de nuestra juventud nace y crece en los barrios. ¿Somos, entonces, un país compuesto por una mayoría de delincuentes y una minoría acosada o tenemos una sociedad dividida real y subjetivamente?

Obviamente que la delincuencia tiene que ver con la pobreza y con las características inhumanas del espacio urbano de los barrios. Pero no podemos olvidar que

ni la pobreza ni los barrios son invento de los pobres y de sus habitantes. Ellos son las primeras víctimas de la injusticia estructural que caracteriza las relaciones económicas, políticas y sociales de la Venezuela "moderna". Ellos han sido empobrecidos aún más en los últimos años.

Los habitantes de los barrios son, también, las primeras víctimas del auge delictivo y de la represión policial indiscriminada. Hasta por simples razones de concentración numérica hay más delitos de este tipo en los barrios. Por las condiciones de vida y por su deterioro de los últimos años hay mayor propensión a las perturbaciones individuales que llevan a conductas delictivas y la presión hacia la pérdida de cohesión social es mucho mayor que en otras zonas de la sociedad.

Esta especie de apartheid, primero mental y poco a poco real, puede llevar a deformar completamente la visión de las raíces de la problemática social de donde surge el auge delictivo y errar de plano en las propuestas de soluciones. Quienes toman decisiones en la sociedad venezolana raramente conocen los barrios, más allá de los paseos electorales o asistencialistas, y generalmente están completamente empapados de la visión señalada.

LA ENSEÑANZA DE LOS MAYORES

Junto a las razones estructurales señaladas, el empobrecimiento de la población y la pérdida de la confianza en la posibilidad de un futuro mejor para las mayorías, el auge delictivo tiene que ver con el ejemplo que efectivamente ofrece el liderazgo social, económico y político venezolano.

A los psicólogos sociales les gusta llamarlo "modelaje social". Podríamos también compararlo con la "enseñanza de los mayores". El delito y su multiplicación en Venezuela está directamente vinculado al comportamiento real que aprendemos de quienes son figura, modelo de vida exitosa, líderes en su amplio sentido de la sociedad venezolana.

Existe una enorme incoherencia entre el decir y el hacer, entre lo que se proclama como valores de la conducta personal o social y lo que en la vida cotidiana funciona realmente. En la sociedad venezolana conviven tranquilamente dos éticas: una la verbal, la que se proclama en los momentos solemnes y en la cotidianidad, la que está reflejada, incluso, en la Constitución y las leyes de la República. Esta es una ética altruista, del Bien Común, de la generosidad, la honradez, el trabajo productivo, la familia, la responsabilidad... Y otra, la consagrada en la actuación cotidiana de quienes tienen "éxito" en la so-

ciudad. La ética que no se proclama sino que se practica: todo se puede con el dinero, por tanto todo se puede para conseguirlo. El poder no tiene límites. Lo que vale es el tener para consumir mucho y enseñar que se tiene lo que se quiere. Ante el poder del dinero y el ansia de consumir se abren todas las puertas y se derrumban todas las barreras. La corrupción es una necesidad "para que funcionen las cosas"... La descripción cada quien la puede completar de acuerdo a su propia experiencia.

Entre nosotros no ha habido una "degradación ética". Seguimos proclamando solemnemente los valores más humanos. Pero se quedan en el nivel de la proclamación, incluso legal. Pero en la práctica es otra la ética individual, política, económica y social que funciona. ¿Si así actúan los mayores, qué se espera de otros sectores sociales?

EL GRAN AUSENTE: UN SISTEMA JUDICIAL AUTONOMO

La enorme brecha entre el decir y el hacer se manifiesta en la inexistencia de un sistema judicial que sancione tomando en cuenta los valores proclamados, consagrados en los textos legales. Un reflejo de lo que son, también, las sanciones reales de la sociedad. Aquí carece de prestigio el que no tiene, o no sabe aprovechar las ocasiones para tener. Si tiene se le estima y jamás se le pregunta, a no ser para imitarle, cómo obtuvo eso que tiene.

El Estado venezolano se basa en el principio de la división de poderes. Sin embargo, el Poder Judicial nunca ha sido políticamente autónomo. Durante los regímenes dictatoriales por razones que huelga insistir. Durante estos treinta y dos años de populismo partidista por las características propias de un sistema en los que los partidos populistas han construido y manejado al Estado y sus poderes en función de la estabilidad de las relaciones de poder "aliadas", sustitutivas de la dictadura militar. Podríamos extendernos en la explicación política de la inexistencia de un poder judicial autónomo del Estado venezolano, pero ese no es el acento de estas líneas.

La autonomía del poder judicial tiene que estar también basada en la coherencia entre los valores proclamados y los reales. Si las leyes aluden a valores proclamados y las sanciones sociales a los valores reales no correspondientes, no puede ni soñarse en un sistema judicial que funcione con un mínimo de regularidad y autonomía.

Para los jueces y el sistema judicial venezolano, cada vez más, la ley es una re-

ferencia lejana. Cumplir los pasos y lapsos procesales (mínimo requisito para hacer justicia sin atropellar) o dictar sentencia de acuerdo a la ley y sus valores inspiradores es un objetivo secundario. En primer lugar nuestros tribunales entran en otro tipo de consideraciones: conveniencias políticas, qué intereses están en juego, "cuánto hay pa'eso", qué bufete introdujo la demanda, quién lo defiende, qué consecuencias para el ascenso social del juez va a tener esta o la otra decisión...

La inseguridad judicial -que no jurídica, porque en materia de leyes tenemos auténticas bellezas y obras maestras- afecta a todos los venezolanos de arriba y de abajo. A los de arriba porque las decisiones salen a favor, pero cada vez más caras. A los de abajo porque nunca sale la decisión. ¿Quién de nosotros que piense un poquito se atreve a dirimir cualquier conflicto civil, mercantil o penal por la vía judicial, esperando justicia? Sobre esto podríamos encontrar más anécdotas que de asaltos y robos... y más si nos asomamos a la ventana del sistema penitenciario y su insolente inhumanidad.

LO ECONOMICO EN LUGAR DE LO POLITICO

El populismo distribuidor de la renta pública petrolera, manejado por los partidos, con formalidades democráticas (elecciones, libertades públicas, etc.), que caracterizó al funcionamiento del sistema de partidos durante treinta años y logró una transición pacífica de la estructura rural-tradicional a la capitalista-urbana, está dejando paso a un capitalismo "normal".

El populismo produjo una sociedad estructuralmente injusta, pero en la que to-

dos los sectores sociales recibieron mayores beneficios que en el pasado. Consiguieron la ansiada estabilidad política. Sobretodo logró crear la esperanza colectiva en un futuro mejor para cada quien. Ahora se trata de consolidar la estructura moderna, para lo cual es fundamental asegurar que el ingreso público y el orden político-social se orienten al desarrollo del modelo exportador, manteniendo, a ser posible, la estabilidad política "democrática" lograda.

Se trata, por tanto, de cambiar las prioridades. Si a la caída de la dictadura lo político era el objetivo fundamental, ahora es lo económico y en función de este tipo de objetivos hay que decidir el uso de los recursos. El populismo, en cuanto significó un esquema de distribución del ingreso que miraba a lo político como prioridad, ya cumplió su cometido. Ahora hay que "superar" el populismo, al que se le achacan, además, el despilfarro y la corrupción, para entrar en la era de la productividad y la eficiencia, es decir, cambiar el patrón de distribución poniendo a lo económico como el criterio único para la toma de decisiones.

REPRIMIR PARA DESMOVILIZAR

El mayor inconveniente para dar este viraje con éxito es la conflictividad social. Esta apareció, además, más rápido de lo esperado por los timoneles del viraje. Los partidos no han tenido tiempo de reformar sus procedimientos populistas de control social para adaptarse a las nuevas prioridades del "orden establecido". Algunos, incluso, dudan de que sean capaces de hacerlo, aunque hay que empujarlos a que lo hagan. Los vientos mundiales y latinoamericanos no están para aupar tran-



siciones claramente dictatoriales, menos aún con fachadas militares.

Toda aquello, entonces, que contribuya a la desmovilización social y que evite, contenga o retrase las manifestaciones del descontento y de la conflictividad social ayuda, es "funcional", al viraje pretendido por el "orden establecido". Veamos cómo se va consiguiendo esto en el actual momento de la sociedad venezolana. Son formas de represión cuyo objetivo principal no es combatir la delincuencia sino contener las presiones sociales.

Un primer tipo de represión desmovilizadora lo constituye la propia situación económica. Los efectos cotidianos del paquete de medidas económicas han convertido la subsistencia en la prioridad real de cada uno de los habitantes del país. La baja sustantiva de los niveles de ingresos en todos los sectores de la sociedad ya no sólo disolvieron las esperanzas de ascender en el futuro, sino que requieren un mayor esfuerzo del normalmente hecho hasta ahora para mantener o no bajar demasiado el nivel real de vida, especialmente para no afectar las posibilidades de los hijos. La mayor parte de la energía vital de quienes tienen que generar sus ingresos para vivir ellos y los suyos tienden a concentrarse en obtenerlos. No queda energía para más nada. Esta situación incide fuertemente en la desmovilización de la sociedad, pues no hay "tiempo" para informarse o para participar en organizaciones civiles sino sólo para el trabajo y el "rebusque".

Esta situación va fuertemente reforzada por el mensaje ideológico oficial. "Con el trabajo de todos saldremos adelante", significa para cada quien el suyo y si no se sale es necesario para sobrevivir y no pensar en más nada. De que la "crisis es de todos" ya nos convencimos. "No hay otra salida" es el plato fuerte del mensaje ideológico en esta fase. No vale patear, no hay más camino. Si lo recorremos el "futuro será mejor", de verdad, verdad, no como antes que creíamos en un futuro artificial. Ahora se van a poner las bases del edificio que, al parecer, comenzamos por el techo y nos está cayendo encima...

Este es el mensaje ideológico más directo. Pero no queda ahí. El Estado ya no tiene más, lo que antes daba el Estado ahora tiene que ponerlo cada quien. Aunque el Estado siga recibiendo más de 12 mil millones de dólares anuales de renta petrolera y esté previsto no sólo el aumento de los precios internacionales del petróleo, sino duplicar el volumen de exportación, no hay dinero para los servicios públicos, tienen que salir de los bolsillos particulares. De reforma tributaria, ni hablar. O sea, el Estado renuncia a su función dis-

tributiva de la renta pública y redistributiva de los beneficios producidos en la sociedad.

Aquí entronca el mensaje oficialista alrededor de la "sociedad civil" sobre la que se quiere descargar ahora una serie de obligaciones propias del Estado como son la orientación y control de la política económica, la vigilancia de los procesos de precios y distribución, y hasta las labores de orden público y seguridad ciudadana. Precisamente lo característico de las sociedades occidentales modernas es la existencia de un poder estatal encargado de hacer cumplir la ley para protección y seguridad de cada uno de sus integrantes y para evitar que cada persona o grupo se haga "justicia" por su propia mano.

La TV no se cansa de presentarnos cómo, hasta para hacer cumplir la Ley, para ser un buen "policía", hay que pasar por encima de la misma ley, de las autoridades policiales o judiciales, y usar sin escrúpulos la violencia y el dinero. Es decir, se insiste continuamente en los medios de comunicación social en que la violencia y el dinero como los únicos medios efectivos para lograr lo que se pretende, es decir, para alcanzarlo todo en esta vida. Con este ingrediente se completa la receta ideológica desmovilizadora.

A esto se suma la represión directamente política. Los partidos populistas funcionan como inmensas redes de control social. No sólo en cuanto las campañas electorales contribuyen a bajar la conflictividad y diluir las presiones sociales sobre el Estado y el Gobierno, sino en cuanto la red clientelar, al hacerse cada vez más selectiva, contribuye a la desmovilización. Igualmente los sindicatos y organizaciones gremiales que, además de ser formas efectivas de control de estas organizaciones, llenan el espacio de la defensa colectiva de los intereses y favorecen la búsqueda de "soluciones" individuales.

La represión directamente policial es otra forma de desmovilización. Comienza por el miedo que genera el propio auge delictivo. Algunos medios periodísticos han popularizado la expresión del "toque de queda" del hámpa que ha vaciado las calles de las ciudades. A esto se añade la Policía con sus actuaciones tipo redadas en las que "caen" normalmente los ciudadanos desprevenidos y raramente algún delincuente, por lo general novato. Pero, cómo protestar contra los desmanes policiales (que son muchos, cotidianos, tan normales que nadie se alarma) con tanto malandro suelto. La ciudadanía atrapada entre unos y otros no tiene escapatoria. A la inseguridad provocada por la delincuencia se suma la que genera la propia poli-

cía que poco se atiene a la legalidad y al respeto de los derechos ciudadanos, especialmente cuando actúa en las zonas populares, y que resulta poco efectiva para contener a la delincuencia y disminuir el miedo ambiental.

Otro nivel, cada vez más usado, de represión es la disuasión militar. La Guardia Nacional ha dejado de ser una fuerza de "cooperación", usada en situaciones de emergencia, para convertirse en presencia permanente. Armamento, soldados y formas de proceder típicamente militares se hacen cada vez más presentes en la vida venezolana bajo pretexto de combatir la delincuencia o garantizar el "orden público", constituyendo, sin duda, un elemento desmovilizador importante, especialmente después de la experiencia tenida de la actuación represiva y desproporcionada de las Fuerzas Armadas a raíz de los sucesos del 27 de febrero de 1989. Con esa ocasión se nos dejó bien claro hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener "orden establecido".

QUIEREN QUE NOS RETIREMOS A LA VIDA PRIVADA

Para la actuación policial-militar y esta política de represión desmovilizadora, junto con el auge delictivo, el crecimiento del narcotráfico se convierte en otro elemento "funcional". La lucha contra la droga lo justifica todo. Incluso se convierte en un elemento ideológico sustitutivo de lo que antes fue la subversión comunista. Si se quiere eliminar a una persona o grupo lo mejor es acusarla de narcotraficante o "sembrarle" droga. Sin embargo, el tráfico de droga crece como la verdolaga y sólo "caen" las pequeñas "mulas". Los grandes, los beneficiarios del lavado..., sus protectores políticos o financieros no aparecen.

La delincuencia sustituye a la "lucha de clases" y el narcotráfico permite luchar contra lo que los Cuerpos de Seguridad del Estado llaman la "subversión legal", concepto que engloba cualquier actividad organizativa molesta para el "orden establecido", aunque se haga dentro del marco de la Ley.

Todos estos factores empujan a los ciudadanos a ocuparse sólo de su vida privada, a salir de sus problemas contando sólo con su esfuerzo y sin apoyarse en acciones colectivas, más aún, actuando constantemente bajo la presión del miedo bien sea al hambre, a la delincuencia o a la represión del sistema. Es necesario hacernos conscientes de esta dinámica, vencer el miedo y buscar formas de ganar espacios para aglutinar esfuerzos en función de lo colectivo.